

REPUBLICA DE COLOMBIA

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO
RADICADO No. 2019_4726064_9

**POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN TRAMITE DE PRESTACIONES
ECONOMICAS EN EL REGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA
(SOBREVIVIENTES - REVOCATORIA)**

EL SUBDIRECTOR DE DETERMINACION DE LA DIRECCION DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, en uso de las atribuciones inherentes al cargo y,

CONSIDERANDO

Que a través de la Resolución N° 14796 del 27 de septiembre de 2007, el ISS reconoció pensión de vejez al señor VIDAL GOMEZ LUIS MARIO, identificado con CC N° 14.938.071, en cuantía inicial de \$901.378, a partir del 6 de noviembre de 2006.

Que a través de la Resolución N° 13107 del año 2011, el ISS dio cumplimiento al fallo judicial proferido por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Cali, modificando la Resolución N° 14796 del 27 de septiembre de 2007, en el sentido de modificar la cuantía inicial de la pensión de vejez del señor VIDAL GOMEZ LUIS MARIO, a un valor de \$1.160.240, a partir del 6 de noviembre de 2006.

Que a través de la Resolución GNR 170946 del 15 de mayo de 2014, esta entidad reliquidó la pensión de vejez del señor VIDAL GOMEZ LUIS MARIO, a una cuantía de \$2.239.666, a partir del 6 de noviembre de 2006.

Que el señor VIDAL GOMEZ LUIS MARIO falleció el día 16 de octubre de 2017, según registro civil de defunción.

Que a través de la Resolución SUB 292652 del 19 de diciembre de 2017, esta entidad reconoció sustitución pensional a la señora FORERO DE VIDAL EDDY ORLANDA, identificada con la CC N° 31.211.596, en calidad de cónyuge, con un porcentaje del 100%, en cuantía inicial de \$3.553.051, a partir del 16 de octubre de 2017, con efectos fiscales a partir del 1 de noviembre de 2017, a consecuencia del fallecimiento del señor VIDAL GOMEZ LUIS MARIO.

Que a través del Auto de Pruebas APSUB 925 del 8 de marzo de 2018, esta entidad informó a la señora FORERO DE VIDAL EDDY ORLANDA, en que dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de dicho auto, debería manifestar su posición y aportar pruebas que considere pertinentes frente a la solicitud realizada por la señora COLORADO FAJARDO ANA MILENA, identificada con la CC N° 29.127.856, en calidad de compañera.

Que a través del Auto de Pruebas APSUB 1464 del 23 de abril de 2018, esta entidad dio apertura a la etapa probatoria de conformidad con la ley 1755 de 2015, ordenando el envío del expediente al oficial de cumplimiento, para que adelante las validaciones correspondientes respecto del reconocimiento realizado a la señora FORERO DE VIDAL EDDY ORLANDA.

Que a través de la Resolución SUB 110861 del 25 de abril de 2018, esta entidad no accedió a la solicitud de reconocimiento de la sustitución pensional interpuesta por la señora COLORADO FAJARDO ANA MILENA, en calidad de compañera y por el joven VIDAL COLORADO MARIO ANDRES, identificado con la CC N° 1.005.944.659, en calidad de hijo mayor de estudios, por cuanto la entidad se encontraba adelantando una investigación administrativa especial con ocasión del fallecimiento del señor VIDAL GOMEZ LUIS MARIO.

Que a través de la Resolución SUB 300682 del 20 de noviembre de 2018, esta entidad redistribuyó la mesada pensional reconocida en la Resolución SUB 292652 del 19 de diciembre de 2017, concediendo a la señora FORERO DE VIDAL EDDY ORLANDA, en calidad de cónyuge, un porcentaje del 50%, en cuantía de \$1.849.186, a partir del 1 de diciembre de 2018 y al joven VIDAL COLORADO MARIO ANDRES, en calidad de hijo mayor de estudios, con un porcentaje del 50%, en cuantía de \$1.849.186, a partir del 1 de diciembre de 2018, dejando en suspenso el reconocimiento de la prestación a la señora COLORADO FAJARDO ANA MILENA, en calidad de compañera, mientras se adelanta la investigación administrativa especial.

Que a través de la Resolución SUB 327780 del 20 de diciembre de 2018, esta entidad resolvió el recurso de reposición confirmando en todas y cada una de sus partes la Resolución SUB 300682 del 20 de noviembre de 2018.

Que mediante la resolución DIR 947 del 28 de enero de 2019 se resuelve un recurso de apelación y se confirma en todas y cada una de sus partes la Resolución SUB 300682 del 20 de noviembre de 2018.

Que mediante fallo de primera instancia No. 072 del 8 de noviembre de 2018 proferido por el JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO CONFUNCIONES DE CONOCIMIENTO resolvió:

“...PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental de deprecado por la apoderada judicial de ANA MILENA COLORADO FAZJARDO Y MARIO ANDRES VIDAL COLORADO, vulnerado por ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES “COLPENSIONES”, CRUZ BLANCA EPS”, de conformidad con los razonamientos expuestos en la parte motiva de este pronunciamiento.

SEGUNDO: En consecuencia este despacho ordenará al representante legal de COLPENSIONES que en un término de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a decidir de fondo la pretensión de pensión de sobreviviente solicitada por ANA MILENA COLORADO FAJARDO, Y MARIO ANDRES VIDAL COLORADO, misma que no podrá fundamentarse en la no

resolución definitiva del proceso administrativo por haberse superado el término para ello...”

CONSIDERACIONES

Que para resolver se considera:

Que en desarrollo de lo dispuesto en la resolución N° 555 de 2015 por la Presidencia de Colpensiones y en ejercicio de las facultades que le confiere dicho acto administrativo por medio de la cual, se define el procedimiento administrativo para la revocatoria directa total o parcial de resoluciones que reconocen prestaciones económicas de manera irregular, definido en el título I, el procedimiento de la Investigación Administrativa Especial, a cargo en ese momento del Oficial de Cumplimiento de la entidad, la Gerencia de prevención del Fraude dio inicio a una investigación administrativa especial, con el fin de revisar el proceso que conllevó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes mediante la resolución SUB 292652 del 19 de diciembre de 2017, redistribuida por medio del acto administrativo SUB 300682 del 20 de noviembre de 2018.

Que de conformidad con la Investigación Administrativa Especial número 192-18 adelantada por la Gerencia de Prevención del Fraude, se concluye que el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del señor VIDAL GOMEZ LUIS MARIO, quien en vida se identificó con CC N° 14.938.071, y a favor de la señora FORERO DE VIDAL EDDY ORLANDA, identificada con la CC N° 31.211.596 en calidad de cónyuge o compañera, se realizó bajo una situación indebida, con fundamento en información incluida de forma irregular, de manera que se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 y el artículo 243 de la Ley 1450 de 2011 para modificar y/o revocar el acto administrativo sin consentimiento del particular que se benefició de la irregularidad, de conformidad con el procedimiento administrativo previsto en la Resolución Colpensiones N° 555 del 2015.

Que la Gerencia de Prevención del Fraude de COLPENSIONES trasladó el auto de cierre No. 500 del 1 de abril de 2019, proferido dentro de la investigación administrativa especial No. 192-18 dentro del expediente del causante VIDAL GOMEZ LUIS MARIO, quien en vida se identificó con CC N° 14.938.071, a la Dirección de Prestaciones Económicas, para lo de su competencia. Lo anterior teniendo en cuenta las siguientes situaciones de hecho y de derecho encontradas durante la investigación administrativa, así:

“...El artículo 52 de la Ley 100 de 1993, estableció que el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida sería administrado en su momento por el Instituto de Seguros Sociales —ISS, no obstante ese instituto fue liquidado dándole paso a la Administradora Colombiana de Pensiones — Colpensiones, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1151 del 2007 y el Decreto Ley 4121 de 2011, que modificó la naturaleza jurídica de dicha entidad, institucionalizándola como una Empresa Industrial y Comercial del Estado, organizada como entidad

financiera de carácter especial, del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, vinculada al ministerio del Trabajo.

El objeto de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, es la administración del régimen de prima media con prestación definida, las prestaciones especiales que las normas legales le asignen y la administración del Sistema de Ahorro de Beneficios Económicos Periódicos (REPS) de que trata el Acto Legislativo No. 01 de 2005.

Las funciones asignadas en virtud de la ley, a la Administradora Colombiana de Pensiones, deben cumplirse con la finalidad de lograr la mayor rentabilidad social mediante la mejor utilización económica y social de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles para que los beneficios a que da derecho el sistema pensional y el sistema de ahorros de beneficios económicos sean prestados en forma adecuada, atendiendo los preceptos del artículo 209 de la Constitución Política.

El artículo 19 de la Ley 797 del 2003, señala “Los representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes responda por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y pago de la suma o prestación fija a periódica a cargo del tesoro público, cuando quiera que existan motivos en razón de los cuales pueda suponer que se reconoció indebidamente una pensión o una prestación económica. En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar copias a las autoridades competentes.”

Esta norma fue estudiada por la Corte Constitucional, mediante sentencia C — 835 de 2003’, que declaró exequible de manera condicionada este artículo, en el entendido que la revocatoria directa de un acto administrativo de tal naturaleza, debe estar precedida de la aplicación del procedimiento establecido en el Código Contencioso Administrativo (hoy Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso administrativo), y en las normas especiales que rijan el procedimiento, por lo tanto, (...) la decisión revocatoria, en tanto acto reglado que es, Deberá sustentarse en una ritualidad sin vicios y en una fundamentación probatoria real y objetiva trascendente, en la cual confluyan de manera evidente todos los elementos de juicio que llevaron al convencimiento del funcionario competente para resolver(...)”

Teniendo en cuenta el marco legal anterior, Colpensiones emitió la Resolución No. 0555 de 30 de noviembre de 2015, por medio de la cual, se define el procedimiento administrativo para la revocatoria directa

total o parcial de resoluciones que reconocen prestaciones económicas de manera irregular, definiendo en el título I, el procedimiento de la Investigación Administrativa Especial, a cargo en ese momento del Oficial de Cumplimiento de la entidad.

Mediante el Acuerdo de Junta Directiva No. 131 de 2018 se determinó que corresponde a la Gerencia de Prevención del Fraude, entre otras funciones adelantar las investigaciones administrativas especiales para la eventual revocatoria de actos administrativos”, razón por la cual, es competente esta Gerencia para adelantar la presente investigación.

REPORTE DE LOS HECHOS

El 08 de mayo de 2018. se recibió un reporte a través de la Línea de Integridad y Transparencia que quedó registrado con el número de Ético ED62MS0R, en el que se indicó que existían posibles hechos de fraude y/o corrupción en el otorgamiento de una Pensión de Sobrevivientes a favor de la señora EDDY ORLANDA FORERO DE VIDAL identificada con cédula de ciudadanía No. 31.211.596, en calidad de cónyuge, con ocasión al fallecimiento del señor LUIS MARIO VIDAL GÓMEZ (Q.E.P.D), quien en vida se identificó con la cedula de ciudadanía N 14.938.071.

VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA Y MOTIVACIÓN DE LA CONCLUSIÓN

Con ocasión al fallecimiento del señor LUIS MARIO VIDAL GOMEZ (Q.E.P.D), quien en vida se identificó con la cedula de ciudadanía No. 14.938.071, la señora EDDY ORLANDA FORERO DE VIDAL identificada con cédula de ciudadanía No. 31211396, argumentando ser la cónyuge del causante, mediante Bizagi 2017_11546151 el día 31 de octubre de 2017 solicitó una Pensión de Sobrevivientes.

Con ocasión a dicha solicitud, mediante resolución SUB N 292652 del 19 de diciembre de 2017, el Subdirector de Determinación de la Dirección de Prestaciones Económicas de Colpensiones, reconoció una Pensión de Sobrevivientes a la beneficiaria en un porcentaje del 100.00%, calidad de cónyuge del causante.

Que posteriormente, la señora ANA MILENA COLORADO FAJARDO el día 05 de enero de 2018 bajo el radicado 2018_153975 solicitó el reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes. Con ocasión al fallecimiento del señor LUIS MARIO VIDAL GÓMEZ (Q.E.P.D).

Por lo anterior, el caso fue enviado al Consorcio COSINTE-RM, a fin de establecer a calidad de las beneficiarias, y determinar si existió o no convivencia simultanea entre el causante y las solicitantes.

Mediante informe COLCO-77078 del 24 de enero de 2018, dicha entidad concluyó:

SI SE ACREDITO el contenido y lo veracidad de la solicitud presentada por Ana Alileno Colorado Fajardo, uno vez analizadas y revisadas cada una de los pruebas aportadas en la presente investigación administrativa.

Se acreditó, pues se logró confirmar que el señor Luis Mario Vidal Gómez y la señora Ana Milena Colorado Fajardo, convivieron en unión libre por 18 años, desde el año 1999 hasta el 16 de octubre de 2017, fecha en que muere el causante.

NO SE ACREDITÓ el contenido y la veracidad de la solicitud presentado por Eddy Orlonda Forero De vidal una vez analizadas y revisados cada una de los pruebas aportados en la presente Investigación administrativa.

No se acredita, pues se logró confirmar que el señor Luis Mario Vidal y la señora Eddy Orlonda Forero de Vidal, contrajeron matrimonio el 28 de diciembre de 1968, más sin embargo no fue posible confirmar que la convivencia hubiera sido permanente hasta el momento que fallece el causante, debido o que se confirmó que en el año 1999 el causante inició una convivencia con las añora (sic) Ana Milena Colorado, dejando así el hogar que compartida con la solicitante, le testimonio otorgado por ella no fue posible confirmarlo debido a que carece de pruebas contundentes como registro fotográfico reciente y/o historia clínica donde confirme que la persona que cuido (sic) y acompañó (sic) al causante hasta el 16 de octubre de 2017, fecha de su muerte."

Que de acuerdo a lo concluido, esta entidad emitió la resolución APSUB N 925 del 08 de marzo de 2018, comunicándole a la señora EDDY ORLANLA FORERO DE VIDAL (solicitante 1), en calidad de cónyuge del causante, quien a la fecha es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, que según lo verificado en la investigación administrativa de la cual hizo parte, se determinó que la señora ANA MILENA COLORADO FAJARDO (solicitante 2), identificada con cédula ciudadanía 29127856, también acredita la calidad de beneficiaria de la prestación en calidad de compañera permanente del causante; además dentro de la misma se establecieron los extremos de la convivencia entre la señora EDDY ORLANDA FORERO DE VIDAL desde el 28 de diciembre de 1968 hasta el año 1998 fecha en la cual se interrumpió la convivencia con el señor Luis Mario Vidal Gómez (Q.E.P.D). y por otra parte se demostró que la señora ANA MILENA COLORADO FAJARDO convivió desde 1999 hasta 16 de octubre de 2017 fecha del fallecimiento del causante, siendo esta información determinante para establecer el porcentaje de redistribución de la pensión de sobrevivientes para ambas cónyuges, por tal razón, se concedió un término de 05 días a partir de la comunicación del auto para que la señora EDDY ORLANDA FORERO DE VIDAL, se pronunciara respecto a la solicitud presentada.

Así las cosas, la Gerencia de Prevención del Fraude, con Auto No. 1029 dcl 05 de julio de 2018, inició Investigación Administrativa Especial con el fin de verificar la existencia de hechos de fraude en el reconocimiento de Pensión de Sobrevivientes a favor de la señora EDDY ORLANDA FORERO DE VIDAL, identificada con cédula de ciudadanía N 31.211.596, con ocasión al fallecimiento del señor LUIS MARIO VIDAL. GÓMEZ (Q.E.P.D).

Mediante Bizagi 2018_12524425 se envió comunicación del auto en mención a la beneficiaria de la prestación informándole el motivo de la actuación, anexando copia de las pruebas recaudadas por este despacho y concediéndole el término de quince 151 días hábiles para que presentara los argumentos y los elementos de prueba que quisiera hacer valer en esta investigación. Dicha comunicación fue remitida a la dirección Carrera 5 N 12 — 16 Oficina 1007 Edificio Suramericana en Cali - Valle, por ser esta la que la ciudadana registró como dirección de notificaciones en el formulario de prestaciones económicas radicado ante esta Entidad mediante Bizagi 2017_11546151 de 31 de octubre de 2017. Dicha comunicación fue entregada de forma satisfactoria en el domicilio de la beneficiaria, el día 05 de octubre de 2018 tal y como consta en la gua GA840176566, la cual certifica este hecho.

Con lo anterior, este Despacho considera que se ha garantizado en debida forma el debido proceso de la ciudadana, razón por la cual no se evidencian vicios de procedimiento que puedan generar la nulidad de lo actuado.

Teniendo en cuenta que la comunicación del auto de apertura se realizó el 05 de octubre de 2018, el término con el que contaba la ciudadana para presentar argumentos de defensa y aportar o solicitar pruebas, corrió desde el día 08 al 29 de octubre de 2018. Dentro de dicho término, la señora EDDY ORLANDA FORERO DE VIDAL., radicó el escrito con Bizagi 2018_13405803 de fecha 23 de octubre de 2018, donde señaló que la entidad emitió el edicto emplazatorio No. 132 del 2 de noviembre de 2017 dentro del trámite de reconocimiento de la pensión de sobreviviente con ocasión al fallecimiento del causante y que la ciudadana ANA MILENA COLORADO FAJARDO no se presentó a reclamar dicha prestación.

Agregó que la señora ANA MILENA COLORADO FAJARDO no convivió con el señor LUIS MARIO VIDAL GÓMEZ y que en cambio estando el causante con vida, llegaron a un acuerdo conciliatorio de alimentos frente a los menores hijos que tienen en común MARIO ANDRES VIDAL COLORADO y SARA MARCELA VIDAL COLORADO; que con ocasión a la obligación alimentaria del causante para con sus hijos la señora ANA MILENA COLORADO FAJARDO inició proceso ejecutivo en su contra el cual se tramitó en el Juzgado 9 de Familia de Cali, habiendo sido concluido dicho proceso únicamente por solicitud del demandante MARIO ANDRES VIDAL COLORADO con ocasión al fallecimiento del señor LUIS MARIO VIDAL GOMEZ, lo cual se evidencia en copia del auto interlocutorio de 18 de

enero de 2018 emitido por el Juzgado Noveno de Familia de Oralidad de Cali.

Así mismo indicó que el señor JHON MARIO VIDAL FORERO (hijo del causante impugnó la paternidad que ostentaría el señor LUIS MARIO VIDAL GÓMEZ frente a MARIO ANDRES VIDAL COLORADO y SARA MARCELA VIDAL COLORADO; y que incluso ubicó en los archivos de su esposo una declaración extrajuicio suscrita por LUIS MARIO VIDAL GÓMEZ (Q.E.P.D.) y ANA MILENA COLORADO FAJARDO el 9 de junio de 2015 ante la Notaría 3 del Círculo de Cali donde las partes indican que a partir de lo fecha acordamos que quedarnos separados de cuerpo y techos, lo que seria indicativo de que la pareja no convivía hasta la fecha de fallecimiento del causante.

Conforme a lo anterior, este despacho resolverá la presente investigación con el material probatorio recaudado; la documentación que reposa dentro del expediente pensional del causante y la aportada por la señora EDDY ORLANDA FORERO DE VIDAL.

Dentro del trámite de investigación adelantado por el Consorcio COSINTE- RM, se entrevistó a la señora Eddy Orlanda Forero de Vidal, quien afirmó que el señor Luis Mario Vidal Gómez Q.E.P.D era su esposo, que procrearon 8 hijos, de los cuales uno ya es fallecido; señaló que no conoce hijos extramatrimoniales del causante. La solicitante manifestó que conoció al causante en el año 1966 y que contraen matrimonio el día 28 de diciembre de 1968 en la Iglesia del Barrio Obrero, en cuanto a su convivencia indica que se desarrolló en el sector de Agua Blanca, por espacio de 14 años, posteriormente se trasladan al Barrio Los Alcaceres al predio ubicado en la Calle 70 B 1 A 13 Bloque 140 Apto 102, hasta el fallecimiento del causante. En cuanto a las pertenencias de su esposo, indica que tiene algunas y presentó fotografías aunque no son recientes por lo cual no es posible confirmar una convivencia con esta prueba.

De igual manera, se entrevistó a la testigo pariente Alba (esposa de Jesús Antonio Vidal — hermano del causante), quien manifestó que la señora Eddy Forero era la esposa del causante pero que se habían separado hace varios años porque el causante inició convivencia con otra persona y al momento de su muerte vivía con ella.

Por último, también se entrevistó al señor Jesús Antonio Vidal Gómez (hermano del causante), quien señaló que conoce a la señora Eddy Forero desde el año 1970, con quien su hermano procreo 7 hijos, pero confirmó que el causante se había separado hace varios años de la señora Eddy Forero, pues incluso afirmó que el causante vivía en el segundo piso de la vivienda de su vivienda con la señora Ana Milena Colorado (compañera permanente), con quien convivió hasta el momento de su muerte.

De acuerdo a la información verificada, cotejo de documentación, entrevistas y trabajo de campo, se logró confirmar que el señor Luis Mario Vidal Gómez (Q.E.P.D) y la señora Eddy Orlanda Forero de Vidal, contrajeron matrimonio el 28 de diciembre de 1968, más sin embargo no fue posible confirmar que la convivencia hubiera sido permanente hasta el momento que fallece el causante, debido a que se confirmó que en el año 1999 el causante inició una convivencia con la señora Ana Milena Colorado, dejando así el hogar que compartía con la solicitante, el testimonio otorgado por ella no fue posible confirmarlo debido a que carece de pruebas contundentes como registro fotográfico reciente y/o historia clínica donde confirme quien fue la persona que cuido y acompañó al causante hasta el 16 de octubre de 2017, fecha de su muerte.

Conforme las evidencias documentales y las entrevistas realizadas en las labores investigativas adelantadas por el Consorcio Cosinte — RM se concluye que si bien la señora EDDY ORLANDA FORERO DE VIDAL se encontraba casada con el causante conforme se evidencia con el registro civil, la ciudadana no convivió con el señor LUIS MARIO VIDAL GÓMEZ (Q.E.P.D). los últimos 5 años anteriores a su fallecimiento, razón por la cual, presuntamente buscó inducir en error a la administración cuando indicó baja la gravedad del juramento en declaración extrajudicial presentada por ella ante la Notaria 9 del Circulo de Cali y adjunta a su solicitud de pensión de sobreviviente radicada con el Bizagi 2017_11546151, que:

“(...) fui casada por los ritos de la ley católica por espacio de cuarenta y nueve (49) años, es decir desde el 28 de diciembre de 1968, con el que en vida respondía al nombre de Luis Mario Vidal (Q.E.P.D.) quien se identificaba con lo cédula de ciudadanía No. 14.938.071 de Cali, unión matrimonial dentro de lo cual hay descendencia de siete hijos mayores de edad. Declaro bajo la gravedad de juramento que nuestra unión matrimonial fue estable, continua, sin interrupción bajo el mismo techo como esposos, sin que hubiera habido separación alguna entre nosotros, convivencia matrimonial y extramatrimonial (que se dio hasta el día de fallecimiento de mi esposo Luis Mario Vidal (Q.E.P.D.) ocurrido el día 156 de octubre de 2017 por muerte natural (...) Así mismo es mi deseo manifestar que mi esposo (...) fuera de nuestros hijos no tenía más hijos reconocidos, ni por reconocer, ni adoptados, ni en proceso de adopción, siendo lo suscrita la única persona con mayores y mejores derechos para reclamar lo que por ley me corresponda.(...)”

Lo anterior está desvirtuado pues la misma beneficiaria en su escrito radicado mediante Bizagi 2018_23405803 manifestó conocer el nombre de dos hijos extramatrimoniales reconocidos por el causante y de su progenitora ANA MILENA COLORADO FAJARDO de quien se dice pudo haber convivido con él. Por lo tanto, puede inferirse que la ciudadana presuntamente buscaba inducir en error a la administración y que tal

propósito se verificó, pues se reconoció un derecho bajo el supuesto de una convivencia permanente e ininterrumpida durante los últimos 5 años anteriores al fallecimiento entre la solicitante y el causante, por lo que queda demostrado que si bien la solicitante ostentaría la calidad de beneficiaria por ser la cónyuge del señor Luis Mario Vidal Gómez, no lo sería en el porcentaje que se le reconoció, esto es el 100%, por no haber convivido con él hasta la fecha de su fallecimiento.

Según los elementos de juicio referidos, este despacho ha encontrado que las acciones anteriores y esta tipología de fraude sin duda, contribuyen en el detrimento del patrimonio del régimen de prima media con prestación definida de la Entidad, como única administradora de dicho régimen; y del Estado, quien subsidia la mayor parte del sistema pensional del país.

Por lo anterior se evidencia que presuntamente nos encontramos ante circunstancias de fraude en el reconocimiento de la pensión de sobreviviente a favor de la beneficiaria, hecho que presuntamente constituye varios tipos penales, tales como fraude procesal, por inducir en error a la administración reconociendo un pago bajo supuestos falsos. Respecto de este tema, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SP 6269 del 04 de junio de 2014, estableció que:

“El fraude procesal requiere que el sujeto activo acuda al dolo, teniendo plena certeza que su propósito es inducir a error al administrador o al funcionario judicial. Por el contrario, si el error se genera actuando de buena fe, es decir, sin tener la intención de quebrantar la legalidad, no se le puede endilgar responsabilidad penal alguna. aclaró la Corte Suprema de Justicia. (...) la utilización de medios fraudulentos en una actuación judicial o administrativa se caracteriza por presentar las cosas o los hechos de manera diferente o como pasaron en realidad.

Así, para que determinado comportamiento configure el delito de fraude procesal se requiere que quien pueda inducir a error a una autoridad tenga el deber jurídico de decir la verdad o de presentar los hechos de forma verídica, esto es, el fraude procesal se presenta cuando una persona interesada en resolver determinado asunto que se adelanta ante alguna autoridad judicial o administrativa, provoque un error a través de informaciones falsas, todo ello con la finalidad de obtener un beneficio, el cual no habría sido posible si la información ofrecida hubiere correspondido a la verdad”

Estafa agravada, ya que presuntamente se obtuvo dinero del Estado a través del engaño en el que se hizo incurrir a la administración al reconocer un derecho pensional sin el lleno de los requisitos legales. Sobre el particular, la Corte Constitucional, en sentencia T-049 del 2012, indicó:

“el delito de estafa comprende los siguientes elementos, que deben estar presentes de forma concurrente:

(i) el empleo, por parte del sujeto activo de la conducta, de maniobras artificiosas susceptibles de engañar o hacer incurrir en error, (ii) la inducción en error en el sujeto pasivo de tal comportamiento, (iii) el consecuente perjuicio en el patrimonio económico de la víctima y (iv) la obtención como resultado de un provecho ilícito”.

De acuerdo con la jurisprudencia citada y conforme al material probatorio recaudado se puede indicar que presuntamente, la beneficiaria utilizó maniobras fraudulentas con el fin de adquirir el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, configurando un perjuicio y detrimento a los recursos de de seguridad social.

Del mismo modo, presuntamente se configura el delito de falsedad documental, ya que hay indicios que nos llevan a concluir que con la solicitud de pensión, se radicaron documentos con información presuntamente falsa, con el fin de obtener un reconocimiento prestacional, sin el lleno de los requisitos legales. La Corte Suprema de Justicia en Sentencia 3637 del 05 de marzo de 2014, señaló que:

“Alterar la verdad en documentos públicos afecta el interés general de la comunidad, por la confianza que se deposita en estos para acreditar a relación jurídica plasmada (...) la antijuridicidad de un documento falso está en su aptitud de alterar una relación jurídica, en cuanto puede reconocer o negar determinado derecho al servir de prueba. La antijuridicidad de un documento falso está en su aptitud de alterar una relación jurídica, en cuanto puede reconocer o negar determinado derecho al servir de prueba”.

Por lo anterior, presuntamente se tipifica este delito en la conducta realizada por la beneficiaria, toda vez que la presentación de documentación de carácter público, como son las declaraciones etrajuicio aportadas con la solicitud de pensión, tienen relevancia jurídica, pues a partir de ellas se emitió un acto administrativo como el cual se aprobó un reconocimiento a quien no tenía el derecho.

No obstante, para dar aplicación a lo dispuesto a los artículos 19 de la Ley 797 del 2003 y 243 de la Ley 1450 del 2011 y para garantizar el debido proceso de los interesados, es que se adelanta una investigación administrativa especial en la que se analiza en forma individual lo acontecido con las irregularidades con las que fue reconocida mediante Resolución SUB No. 292652 de fecha 19 de diciembre de 2017.

Por lo anterior, es evidente que el caso objeto de estudio, no es un caso aislado, ni representa un error de la administración, nos encontramos frente a un fenómeno criminal que afecta al régimen de prima media y el cual será puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, para que delante la investigación correspondiente por los presuntos delitos evidenciados y los demás que se tipifiquen o se establezcan en la investigación penal.

CONCLUSIÓN

Conforme a todo lo expuesto, se debe concluir que presuntamente nos encontramos frente a un hecho de fraude en el reconocimiento de una Pensión de Sobrevivientes a favor de la señora EDDY ORLANDA FORERO DE VIDAL identificada con cédula de ciudadanía N 31.211.596; toda vez que las declaraciones extrajuicio allegadas para el reconocimiento prestacional, presuntamente carecen de veracidad, debido a que en las mismas se estipulan hechos contrarios a la verdad. Lo anterior, teniendo en cuenta el material probatorio recaudado en la Investigación Administrativa Especial y en la documentación que reposa dentro del expediente pensional del señor LUIS MARIO VDAL GOMEZ (Q.E.P.D.) quien en vida se identificó con la cedula de ciudadanía N5 14.938.071, con la cual se demostró que no existió convivencia permanente e ininterrumpida durante los últimos 5 años anteriores al fallecimiento entre la solicitante y el causante.

Ahora bien, se logra determinar que con los hechos investigados en el presente caso, presuntamente se configuran los delitos de estafa agravada, fraude procesal y falsedad en documento público, los cuales afectan de manera directa a Colpensiones, toda vez que se genera un detrimento patrimonial a los recursos públicos, se afecta la confianza que los afiliadas tienen en la entidad y se obtiene el reconocimiento de un derecho que podría corresponder a otro ciudadano.

OTRAS DETERMINACIONES

No obstante las conclusiones plasmadas en precedencia, se recomienda a la Dirección Prestaciones Económicas de la Entidad verificar a través de investigación administrativa de convivencia si la señora ANA MILENA COLORADO FAJARDO, realmente convivió con el causante los últimos 5 años de vida del mismo.

Lo anterior teniendo en cuenta que mediante auto de pruebas APSUB 925 DE 8 DE MARZO DE 2018. se indicó que “según lo verificado en la investigación administrativa (...) se determinó que la señora COLORADO FAJARDO ANA MILENA identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANIA No. 29127856, también acredita la calidad de beneficiaria de la prestación en calidad de Compañero (a) permanente (...) y por otra parte se demostró que la sra COLORADO FAJARDO ANA MILEVA convivió con el causante desde 1999 hasta 16 de octubre de 2017 fecha del fallecimiento, siendo esta información determinante para establecer el %

de redistribución de la pensión de sobrevivientes para ambas con cónyuges. (...)”

Sin embargo, mediante comunicación radicada por la señora EDDY ORLANDA FORERO DE VIDAL con Bizagi 2018_13405803 del 23 de octubre de 2018, aportó pruebas, dentro de las cuales se evidencia una declaración extrajuicio suscrita por LUIS MARIO VIDAL GÓMEZ (Q.E.P.D.) y ANA MILENA COLORADO FAJARDO el 9 de junio de 2015 ante la Notaria 3 del Circulo de Cali donde las partes indican que “a partir de la fecha acordamos que quedamos separados de cuerpo y techo”, lo que sería indicativo de que la pareja no convivió hasta la fecha de fallecimiento del causante.

Así mismo, aportó documentos emitidos por el Juzgado 9 de Familia de Oralidad del Circuito de Cali donde se estaría tramitando el proceso ejecutivo No. 2012-556 por obligación alimentaria, promovido por ANA MILENA COLORADO FAJARDO en representación de sus menores hijos en contra del causante.

Dichas verificaciones no se adelantan dentro de la presente investigación administrativa especial, pues su objeto se reduce a verificar presuntos hechos de fraude en el reconocimiento prestacional de quien hoy ostenta la calidad de beneficiaria conforme a los lineamientos de la resolución 555 de 2015. No obstante ello, se realizan las mencionadas recomendaciones con el fin de prevenir el fraude en la posible redistribución de la prestación.

Por lo anterior en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución No. 555 del 30 de noviembre de 2015, el Gerente de Prevención del Fraude, en mérito de lo expuesto y como cierre de esta investigación administrativa especial.

RESUELVE

PRIMERO: *Cerrar la presente Investigación Administrativa Especial.*

SEGUNDO: *Remitir esta decisión junto con los soportes probatorios aquí mencionados a la Gerencia Nacional de Determinación de Derechos para que dentro del ámbito de sus competencias proceda a tomar la decisión que corresponda frente al Acto Administrativo SUB No. 292652 de fecha 19 de diciembre de 2017.*

TERCERO: *Remitir copia del expediente a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue la posible comisión de los punibles de Fraude Procesal, Falsedad Documental, estafa, y los demás que se tipifiquen o se establezcan dentro de la Investigación penal.*

CUARTO: *Comunicar la presente decisión a la ciudadana.*

QUINTO: *Contra la presente decisión no procede recurso alguno, de conformidad con el procedimiento establecido en la Resolución 555 del 30 de noviembre de 2015.*

Que mediante la Resolución No. 0555 del 30 de noviembre de 2015 Colpensiones definió el procedimiento para la revocatoria en forma directa de resoluciones por medio de las cuales se reconocen de manera irregular pensiones y se definen competencias.

Que el numeral 4.3.3.1.4 del Acuerdo N° 131 del 2018, '*Por el cual se modifica al estructura interna de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones y se deroga el Acuerdo 108 de 2017*', se dispuso que las Subdirecciones de Determinación de Derechos de la Dirección de Prestaciones Económicas, tiene la función de resolver las solicitudes de revocatoria directa contra los actos administrativos que profiera.

Que el artículo 4 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece:

"Artículo 4. Formas de iniciar las actuaciones administrativas. Las actuaciones administrativas podrán iniciarse:

- 1. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés general.*
- 2. Por quienes ejerciten el derecho de petición, en interés particular.*
- 3. Por quienes obren en cumplimiento de una obligación o deber legal.*
- 4. Por las autoridades, oficiosamente."*

Que así mismo la Ley 1437 de 2011 establece:

"ARTICULO 93. Causales de Revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

- 1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.*
- 2. Cuando no están conformes con el interés público o social, o atenten contra Él.*
- 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona."...*

Que en concordancia con lo anterior, lo anterior, el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, al tenor dispone:

"REVOCATORIA DE PENSIONES RECONOCIDAS IRREGULARMENTE.

Los representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y pago de la suma o prestación fija o periódica a cargo del tesoro público, cuando quiera que exista motivos en razón de los cuales pueda suponer que se reconoció indebidamente una pensión o una prestación económica. En caso de

comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar copias a las autoridades competentes."

Que en el mismo sentido el Consejo de Estado en sentencia del 20 de Enero de 2011, resaltó:

....Sin embargo, respecto de actos administrativos de carácter prestacional, existe norma especial que regula las causales para su revocatoria directa sin el consentimiento expreso del titular de los derechos contenidos en aquellos, a saber las contenidas en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, según el cual corresponde a las Instituciones de Seguridad Social, o a quienes tengan a su cargo el pago de prestaciones económicas, verificar de oficio cumplimiento de los requisitos necesarios para consolidar el derecho, así como la legalidad de los documentos que sirvieron para acreditarlos, cuando existan motivos que permitan inferir que el reconocimiento de la prestación económica periódica fue indebido; disposición que en el presente caso debe aplicarse de preferencia, pues ha sido el legislador quien ha considerado que para este tipo especial de actos administrativos de contenido particular y concreto, por su naturaleza estrechamente relacionada con el derecho al trabajo, deben existir normas especiales de mayor rigurosidad cuando de sus revocatoria directa se trate.

En este orden de ideas, con la expedición de la Ley 797 de 2003 (artículo 19), los responsables del pago de prestaciones económicas, deben verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos por parte del beneficiario para la adquisición del derecho y la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y pago de la prestación periódica a cargo del tesoro público. En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del acto administrativo, aún sin el consentimiento del particular y compulsar copias a las autoridades competentes para las investigaciones pertinentes.

Por su parte en la sentencia C-835 de 2003, la Corte Constitucional estableció que tal facultad otorgada a la Administración, es perfectamente válida en aras de proteger la objetividad, transparencia, moralidad y eficacia que la función administrativa requiere en orden al correcto reconocimiento y pago de las pensiones u otras prestaciones económicas propias del régimen de seguridad social, no obstante, determinó que tal atribución solamente puede ejercerse una sola vez, en respeto al "non bis in ídem", y durante su desarrollo debe respetarse celosamente el debido proceso administrativo, es decir, que se citen las personas que puedan estar interesadas en las results de la actuación administrativa, con el objeto de que puedan expresar sus opiniones, presentar pruebas, controvertir las que se alleguen en su contra y en general, para defender sus derechos subjetivos. Sobre este aspecto en particular la Corte Constitucional, expresó:

"Desde luego que en desarrollo del debido proceso la revocatoria establecida en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 tiene que cumplir satisfactoriamente con la ritualidad prevista en el Código Contencioso Administrativo o en los estatutos especiales que al respecto rijan. Vale decir, con referencia al artículo 19 acusado el acto administrativo por el cual se declara la revocatoria directa de una prestación económica, deberá ser la consecuencia lógica y jurídica de un procedimiento surtido con arreglo a los artículos 74, 28, 14, 34 y 35 del Código Contencioso Administrativo (...), para lo cual el titular del derecho prestacional o sus causahabientes deberán contar con todas las garantías que inspiran el debido proceso en sede administrativa, destacándose el respeto y acatamiento, entre otros, de los principios de la necesidad de la prueba, de la publicidad y de la contradicción (...)".

Que de conformidad con la normatividad antes transcrita y tomando en cuenta que en el expediente pensional obra prueba veraz, certera e idónea que respecto del reconocimiento de la pensión de sobreviviente a favor de la señora FORERO DE VIDAL EDDY ORLANDA, identificada con la CC N° 31.211.596, en calidad de cónyuge carecen de veracidad debido a que en las mismas se estipulan hechos contrarios a la verdad, en aplicación de lo estipulado en el artículo 243 de la ley 1450 de 2011 y la resolución N° 555 del 2015, encuentra esta Subdirección que procede la modificación de la resolución SUB 300682 del 20 de noviembre de 2018.

Que se presentó la señora **COLORADO FAJARDO ANA MILENA** identificado (a) con CEDULA CIUDADANIA No. 29127856, en calidad de Compañera(o) con radicado Nro. 2018_153975 presentando los siguientes documentos:

- *Solicitud De Prestaciones Económicas
- *Cedula de ciudadanía de la compañera permanente
- *Registro civil de nacimiento de la compañera permanente
- *Registro civil de defunción del causante
- *Declaraciones juramentadas de convivencia
- *Aviso de prensa

Que de conformidad con el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, "Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes: 1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo común, que fallezca..."

Que el (los) solicitante(s) acredita(n) la condición de beneficiario establecido en la Ley, razón por la cual es procedente el reconocimiento de la sustitución pensional.

Que igualmente se deja constancia en el presente acto administrativo, que de conformidad con el párrafo primero del artículo 28 del decreto 758 de 1990, el cónyuge sobreviviente, compañero o compañera permanente del causante, tendrá derecho a recibir en concurrencia con los hijos menores, inválidos de cualquier edad y estudiantes de 18 o más años de edad, el 50% de la pensión, correspondiente a estos beneficiarios; el otro 50% se distribuirá en forma proporcional entre ellos. De conformidad con el párrafo 1° de la norma en

cita, cuando por extinción o pérdida del derecho, faltare alguno de los beneficiarios del respectivo orden, la cuota parte de su pensión, acrecerá en forma proporcional a la de los demás.

Que el Artículo 47 de la Ley 100 de 1993, Modificado por el art. 13, Ley 797 de 2003 **Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes**. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, **el cónyuge o la compañera o compañero permanente** o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o **la compañera o compañero permanente** supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; **Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1094 de 2003.**

b) En forma temporal, el cónyuge o **la compañera permanente** supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

Declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1094 de 2003.

Si respecto de un pensionado hubiese un **compañero o compañera permanente**, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, **la compañera o compañero permanente** podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente; **Texto subrayado declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional C-1035 de 2008, en el entendido de que además de la esposa o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.**

c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993; **Texto subrayado declarado INEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1094 de 2003.**

d) A falta de cónyuge, **compañero o compañera permanente** e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma total y absoluta de este; **Texto subrayado declarado INEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-111 de 2006**

e) A falta de cónyuge, **compañero o compañera permanente**, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste.

Que dadas las recomendaciones de la Gerencia de Prevención del Fraude en el auto de cierre de la Investigación Administrativa Especial, mediante el informe Investigativo No. COLCO - 174171, realizado por el consorcio COSINTE RM, se pudo establecer que:

“SI SE ACREDITÓ el contenido y la veracidad de la solicitud presentada por Ana Milena Colorado Fajardo, una vez analizadas y revisadas cada una de las pruebas aportadas en la presente investigación administrativa. De acuerdo a la información verificada, cotejo de documentación, entrevistas y trabajo de campo, se estableció que el señor Luis Mario Vidal Gómez y la señora Ana Milena Colorado Fajardo, convivieron desde el año 1999 hasta el 16 octubre 2017, fecha que muere el causante.”

Que de acuerdo a lo anterior y con fundamento en el auto de cierre No. 500 del 1 de abril de 2019 proferido por la Gerencia de Prevención del Fraude, a su vez acorde al contenido del Artículo 47 de la Ley 100 de 1993, congruente con la Investigación realizada por el informe Investigativo No. COLCO - 174171, realizado por el consorcio COSINTE RM se considera que:

Tiene (n) derecho a la pensión de sobrevivientes el (los) siguiente (s) solicitante (s):

FORERO DE VIDAL EDDY ORLANDA identificada con la cédula de ciudadanía N° 31.211.596, en calidad de cónyuge, con un porcentaje del 30.74%, en cuantía de \$1,173,032.00 con efectos fiscales a partir del 1 de mayo de 2019. La pensión reconocida es de carácter vitalicio.

COLORADO FAJARDO ANA MILENA identificado (a) con cédula ciudadanía No. 29127856, en calidad de Compañera con un porcentaje del 19.26%, en cuantía

de **\$734,958.00** con efectos fiscales a partir del 1 de mayo de 2019. La pensión reconocida es de carácter vitalicio.

VIDAL COLORADO MARIO ANDRES ya identificado(a), en calidad de Hijo(a) Mayor Estudios con un porcentaje de 50.00%, en cuantía de \$1,907,989. La pensión reconocida es de carácter temporal, y será pagada hasta el 9 de junio de 2024, día anterior al cumplimiento de 25 años de edad, siempre y cuando el beneficiario acredite estudios conforme a las normas vigentes.

Que la Ley 1160 del 02 de Junio de 1989 manifiesta en el Artículo 16:

“Condición de estudiante. Los hijos estudiantes de 18 o más años de edad, deberán acreditar la calidad de tales, mediante certificación auténtica expedida por el establecimiento docente reconocido por el Ministerio de Educación, en el cual se cursen los estudios. El cambio de carrera o profesión por razones distintas de salud, hará perder el derecho a la sustitución pensional.”

Que en cuanto a la calidad de estudiante, la ley 1574 de 2012 establece:

“Artículo 1 Objeto. La presente ley tiene como propósito definir las condiciones mínimas que se deben reunir para acreditar la condición de estudiante por parte de los hijos del causante, mayores de 18 y hasta los 25 años cumplidos, imposibilitados para trabajar por razón de sus estudios y que dependían económicamente del causante al momento de su fallecimiento, para efectos de ser reconocida la pensión de sobrevivientes.”

Artículo 2°. De la condición de estudiante. Para efectos del reconocimiento de la pensión de sobreviviente en los hijos del causante que tengan la calidad de estudiantes enmarcados en el artículo anterior, se deberán acreditar los siguientes requisitos:

Certificación expedida por el establecimiento de educación formal de preescolar, básica, media o superior, autorizado por el Ministerio de Educación Nacional para el caso de las instituciones de educación superior y por las Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas para el caso de los establecimientos de educación preescolar, básica y media, donde se cursen los respectivos estudios, en la cual conste que el estudiante cumplió con la dedicación a las actividades académicas curriculares con una intensidad académica no inferior a veinte (20) horas semanales.

Para el caso de los estudiantes de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, la calidad de estudiante se demostrará con la certificación que expida la respectiva institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano, en donde debe indicarse la denominación del programa, la duración en la cual conste que el estudiante cumplió con la dedicación a las actividades académicas curriculares con una intensidad académica que no puede ser inferior a 160 horas, del

respectivo periodo académico, el número y la fecha del registro del programa.

Estas certificaciones de asistencia se deberán acreditar a la entidad correspondiente semestralmente."

Remítase el expediente a la subdirección V, para que se efectué el estudio de los valores que fueron girados por concepto de pago de lo no debido de conformidad con lo expuesto en la presente resolución.

Que por lo anterior se redistribuye la pensión de sobrevivientes con fundamento en el auto de cierre proferido por la Gerencia de Prevención del Fraude, aclarando que la prestación se paga a corte de nómina pensional de conformidad con las razones expuestas.

Que son disposiciones aplicables: Son disposiciones aplicables: Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, y C.P.A.C.A.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar la Resolución SUB 300682 del 20 de noviembre de 2018 por medio de la cual se redistribuyó una pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de **VIDAL GOMEZ LUIS MARIO** ya identificado, ocurrido el día 16 de octubre de 2017, con base en el auto de cierre No. 500 del 1 de abril de 2019, proferido dentro de la investigación administrativa especial No. 192-18, llevada a cabo por la Gerencia de Prevención del Fraude facultada por el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 y el artículo 243 de la Ley 1450 de 2011 y la resolución 555 de 2015.

ARTÍCULO SEGUNDO: Redistribuir la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de **VIDAL GOMEZ LUIS MARIO** ya identificado, ocurrido el día 16 de octubre de 2017, a los siguientes beneficiarios:

FORERO DE VIDAL EDDY ORLANDA ya identificado(a), en calidad de Cónyuge o con un porcentaje de 30.74%. La pensión reconocida es de carácter vitalicio, en los siguientes términos y cuantías:

Valor Mesada Beneficiario(a): **\$1,173,032**

SON: UN MILLON CIENTO SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS PESOS M/CTE.

La presente prestación será ingresada en la nómina del periodo 201905 que se paga en el periodo 201906 en la central de pagos del banco BANCOLOMBIA ABONO CUENTA de CALI CR 1 A 35 131 CARRERA PRIMERA.

A partir de la inclusión en nómina de la presente prestación, se harán los respectivos descuentos en salud conforme a la ley 100 de 1993 en SALUD TOTAL.

COLORADO FAJARDO ANA MILENA ya identificado(a), en calidad de Compañera(o) con un porcentaje de 19.26%. La pensión reconocida es de carácter vitalicio, en los siguientes términos y cuantías:

Valor Mesada Beneficiario(a): **\$734,958**

SON: SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

La presente prestación será ingresada en la nómina del periodo 201905 que se paga en el periodo 201906 en la central de pagos del banco BBVA C. P. 1ERA QUINCENA de CALI CR 5 13 83 CALI.

A partir de la inclusión en nómina de la presente prestación, se harán los respectivos descuentos en salud conforme a la ley 100 de 1993 en SALUD TOTAL.

VIDAL COLORADO MARIO ANDRES ya identificado(a), en calidad de Hijo(a) Mayor Estudios con un porcentaje de 50.00%. La pensión reconocida es de carácter temporal, y será pagada hasta el 9 de junio de 2024, día anterior al cumplimiento de 25 años de edad, siempre y cuando el beneficiario acredite estudios conforme a las normas vigentes, en los siguientes términos y cuantías:

Valor Mesada Beneficiario(a): **\$1,907,989**

SON: UN MILLON NOVECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE.

La presente prestación será ingresada en la nómina del periodo 201905 que se paga en el periodo 201906 en la central de pagos del banco OCCIDENTE C. P. 1ERA QUINCENA de CENTRO DE PAGOS VALLE DE LILI CALI.

A partir de la inclusión en nómina de la presente prestación, se harán los respectivos descuentos en salud conforme a la ley 100 de 1993 en SALUD TOTAL.

ARTÍCULO TERCERO: Según sea el caso, y en el evento de llegar al límite de la pensión, la cuota correspondiente acrecerá en forma proporcional a favor de quienes continúen disfrutando el derecho.

ARTÍCULO CUARTO: Comuníquese al JUZGADO CUARTO PENAL DEL CIRCUITO CONFUNCIONES DE CONOCIMIENTO de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO QUINTO: Notifíquese a **EDDY ORLANDA FORERO DE VIDAL, ANA MILENA COLORADO FAJARDO,** y **MARIO ANDRES VIDAL COLORADO,** ya identificados haciéndole (s) saber que en caso de inconformidad contra la presente resolución, puede interponer por escrito los recursos de Reposición y/o de Apelación. De estos recursos podrá hacerse uso dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, manifestando por escrito las razones de inconformidad, según el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Dada en Bogotá, D.C. a:

COMUNÍQUESE NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diana Carolina Montana Bernal', with a horizontal line above the name and a small mark below it.

DIANA CAROLINA MONTANA BERNAL
SUBDIRECTORA DETERMINACION V FUNC ASIG SUB VIII
COLPENSIONES

ERWIN ROGELIO ALVEAR OJEDA
ANALISTA COLPENSIONES

JOSE MANUEL SANCHEZ JARAMILLO

MARIA ADRIANA CITA RODRIGUEZ
REVISOR

COL-SOB-207-